

# Minería, conflictos sociales y desconfianza

Luis F. Vilcatoma Salas

La dinámica social, en los días que transcurren está, a no dudarlo, fuertemente definida por la problemática de la minería informal y la contaminación del medio ambiente.

Más de 90 mil mineros informales han paralizado recientemente en las regiones del sur rechazando un decreto gubernamental que pretendía incorporarlos a la legalidad. Obligándolos a trabajar bajo condiciones de respeto al medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y el pago de tributos. La contundencia de la paralización que duró algunos días, poniendo en serios aprietos la comunicación terrestre entre las regiones del sur, obligó al gobierno a la conformación de una comisión para estudiar el problema y buscar una solución los próximos días, con lo que la paralización fue suspendida en espera de un arreglo por lo menos relativamente satisfactorio para ambas partes.

No bien se aplacaron las llamas de este primer incendio social, ahora se ha iniciado otro con Tía María, el proyecto que pretende ejecutar la Southern en la provincia de Islay de la Región Arequipa, para explotar 120 mil toneladas de cobre al año haciendo uso de una gran cantidad de agua para el tratamiento del mineral, además de contaminar el medio ambiente con el polvo fruto de esta actividad.

En la Región de Puno el problema también tiene, como es de conocimiento público, fuerte incidencia con la minería informal de San Antonio de Putina y Carabaya, donde aproximadamente 40 mil personas vive de esta actividad explotando oro y recurriendo al uso de químicos peligrosos para la salud como es el mercurio y el cianuro con los que se contaminan ríos y hasta el propio Lago Titicaca hacia donde discurren varios de ellos. Las poblaciones que dependen de las aguas de estos ríos ya han levantado su voz con mucha seriedad por la contaminación de sus fuentes acuíferas y, en consecuencia, el

advenimiento de severos capítulos de protesta social en los tiempos por venir es más que seguro.

Si bien es cierto que en el Perú la desidia gubernamental para hacer oídos y enfrentar positivamente las demandas sociales, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia republicana, por la forma como se ha estructurado la relación gobernantes gobernados, en el Perú de estos años, esta desarmonía se ha agigantado con la particularidad que los sujetos sociales que forman parte de los gobernados no son los mismos que antes. Los sujetos sociales compuestos por las diferentes clases, segmentos y categorías sociales que pluralizan el país de hoy, son sujetos más informados, con más expectativas de vida individual y grupal, con más experiencia respecto a lo que conviene y no conviene, y por lo mismo con una mayor disposición a la defensa de sus derechos y de lo que consideran importante y justo, y a la organización para viabilizar tal voluntad, como queda demostrado con los acontecimientos arriba referidos. Además, es bueno señalar que el crecimiento poblacional y la ampliación de los espacios de la actividad minera formal e informal en el Perú, en este último caso por la fuerte demanda de nuestros recursos de la minería metálica y no metálica por la industria capitalista actual, ha acelerado la colisión entre los intereses sanitarios y productivos de la población, especialmente de la población sencilla y pobre, y los intereses de los grandes inversores mineros como de los pequeños y medianos informales, afincados en unas ganancias que obvian la salud y las prioridades productivas de las poblaciones afectadas.

Otro factor que incide en la actitud reactiva de la población, en este caso frente a la gran minería, es la desconfianza ante lo que esta dice y ofrece. La experiencia le dice a la gente que las empresas mineras ofrecen muchas cosas y presentan informes de “impacto ambiental” no creíbles suficientemente, solamente para pasar el bache de la oposición social y luego hacer otra cosa que no es sino lo que siempre han venido haciendo en materia de empleo, contaminación ambiental, salud y actividad productiva en la zona. Se ha configurado aquí, en consecuencia, un estigma del pasado que las mineras no pueden superar.

Esta misma desconfianza se extiende al Estado, generalmente controlado por grupos de poder que lo han privatizado para beneficio propio y de aquellos que transitoriamente, me refiero a la clase política del país, se aúpan en la esfera gubernamental y hacen de la corrupción un medio de vida y de enriquecimiento ilícito. El escándalo del gran “faenón” donde están implicados además de ex

ministros y figuras de la política nacional, algunos personajes del ejecutivo actual, sólo es la punta de un ovillo que seguramente conduce a las entrañas de un monstruo gigante de la corrupción como nunca se lo ha tenido hasta la fecha, y que actúa inmundamente tras cada una de las grandes decisiones que se toman desde arriba. ¿Cómo confiar, entonces, en gobernantes que actúan de esta manera y sobre los cuales diariamente se producen “destapes”?, ¿cómo estar seguros si detrás de cada licitación pública o convenio de inversión, no hay también un sujeto Canaan o Rómulo que digita y arregla inversiones? incluso ¿cómo estar seguros si detrás de lo que se hace en ambientes más cercanos a nosotros, como es el Gobierno Regional y los municipios, no hay también remedos de Rómulos y Canaanes, que hacen lo mismo aquí con el dinero de todos los peruanos?

Existe, entonces, una enorme responsabilidad en la clase política nacional y regional por lo que está sucediendo en la conciencia y en la voluntad de las personas, y en lo que puede suceder en el futuro. Una responsabilidad de la cual, creemos, no se ha tomado debida nota especialmente en las esferas oficiales donde se continúan reproduciendo los vicios y laceraciones éticas con las que se ha construido y reproducido el Estado republicano actual.

Fuente: Los Andes <http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20100418/35073.html>